

La política del nombramiento experto: control presidencial y composición de las comisiones ad hoc en la formulación de políticas públicas en Chile (1990–2022)

Carla Cisternas Guasch

c.g.cisternas.guasch@hum.leidenuniv.nl

Resumen: Las comisiones *ad hoc* permiten incorporar conocimiento externo y proyectar independencia, pero también generan riesgos de agencia cuando sus integrantes cuestionan diagnósticos oficiales o formulan recomendaciones incompatibles con las prioridades del Ejecutivo. Este artículo sostiene que la composición de estos espacios funciona como un mecanismo de delegación controlada mediante el cual los presidentes gestionan esa tensión y ajustan sus nombramientos según el tipo de vulnerabilidad política. Utilizando modelos logísticos sobre 903 nombramientos agrupados en 69 comisiones creadas en Chile entre 1990 y 2022, el estudio examina cómo varía el nombramiento de expertos, representantes de la sociedad civil, políticos y representantes empresariales frente a dos formas de exposición: la desaprobación presidencial, entendida como una presión reputacional difusa, y los eventos críticos, concebidos como episodios agudos y desestabilizadores. El análisis distingue además entre perfiles recurrentes y nuevos. La base combina investigación de archivo con un indicador de eventos críticos construido a partir de miles de millones de registros mediáticos de la *Global Database of Events, Language, and Tone* (GDELT) de Google Jigsaw. Los resultados muestran que la desaprobación se asocia con una mayor incorporación de representantes de la sociedad civil y una menor presencia de políticos. En cambio, los eventos críticos se relacionan con el nombramiento de expertos recurrentes en el circuito asesor. Los hallazgos sugieren que el Ejecutivo puede preservar la autoridad externa de la comisión y reducir simultáneamente la incertidumbre de la delegación mediante la selección de perfiles institucionalmente legibles.

Palabras clave: *comisiones ad hoc; delegación controlada; nombramientos presidenciales; expertos; Chile.*

Introducción

Las comisiones *ad hoc* suelen presentarse como instancias técnicas que incorporan conocimiento especializado externo y formulan recomendaciones basadas en evidencia (Craft y Howlett, 2013; Hesstvedt y Christiansen, 2021). Sin embargo, su creación y composición implican decisiones políticas que determinan quiénes participan en la definición de los problemas públicos, qué formas de conocimiento adquieren autoridad y qué alternativas pueden ser consideradas legítimas o viables (Boswell, 2008; Bressers et al., 2017; Christensen y Holst, 2017; Sulitzeanu-Kenan, 2010). Su atractivo reside precisamente en que permiten incorporar actores externos y proyectar una respuesta independiente, mientras el Ejecutivo conserva control *ex ante* sobre su mandato, duración y composición.

Esta combinación plantea un problema central de delegación. Cuando el gobierno enfrenta vulnerabilidad política, aumenta el valor de recurrir a actores externos capaces de conferir credibilidad a su respuesta. Sin embargo, también aumentan los costos potenciales de delegar en personas que pueden cuestionar el diagnóstico oficial, visibilizar desacuerdos o formular recomendaciones incompatibles con las prioridades gubernamentales (Boin et al., 2016; Christensen et al., 2022; Hesstvedt y Christensen, 2021; Hood, 2011; Sulitzeanu-Kenan, 2010). Cuanto mayor es la necesidad de autoridad externa, más costosa puede resultar la pérdida de control de agencia sobre el proceso de asesoramiento.

Este artículo aborda esta interrogante, preguntándose: ¿cómo la composición de las comisiones permite a los presidentes gestionar la tensión entre autoridad externa y riesgo de agencia? Más específicamente, ¿cómo pueden los presidentes, mediante la selección de sus integrantes, obtener la credibilidad que aporta la delegación en actores externos y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre y los riesgos que esta genera cuando están políticamente expuestos? Aunque la literatura ha mostrado que la decisión de convocar comisiones responde a cálculos políticos, ha prestado menos atención a la selección de sus integrantes. Este artículo examina los nombramientos como un mecanismo mediante el cual el Ejecutivo estructura *ex ante* el proceso de asesoramiento y analiza cómo estas decisiones se asocian con distintas formas e intensidades de vulnerabilidad gubernamental, tales como la desaprobación presidencial y la exposición a eventos críticos.

Sostengo que las comisiones *ad hoc* funcionan como arreglos de delegación controlada, en los que el Ejecutivo incorpora actores externos a la formulación de políticas públicas, pero conserva mecanismos de control *ex ante* para reducir los riesgos de agencia. Dentro de estos mecanismos, la composición constituye uno de sus principales controles (Hesstvedt y Christensen, 2021).

Mediante la selección de sus integrantes, el Ejecutivo determina qué recursos de legitimidad incorpora mientras gestiona la incertidumbre derivada de delegar en actores externos. La forma que adopta esta estrategia depende del tipo y la intensidad de la vulnerabilidad enfrentada. La desaprobación presidencial expresa un deterioro difuso del apoyo ciudadano y aumenta el valor de proyectar receptividad social y distancia respecto de la política institucional. Los eventos críticos, como escándalos, desastres naturales o crisis, generan presiones focalizadas por diagnóstico y capacidad de respuesta, elevando el valor de la autoridad experta. Cuando estos acontecimientos adquieren mayor severidad, también aumentan los costos potenciales de delegar en actores cuya actuación resulta desconocida. En esos contextos, los gobiernos pueden privilegiar expertos recurrentes, cuyas credenciales sostienen la legitimidad técnica de la comisión y cuya trayectoria previa dentro del circuito asesor aporta información observable sobre su comportamiento en estos espacios. La recurrencia funciona así como una señal de legibilidad institucional que permite reducir la incertidumbre de selección sin eliminar la autoridad externa que hace políticamente valiosa a la comisión.

Para evaluar este argumento, el artículo estudia siete administraciones presidenciales chilenas entre 1990 y 2022. Chile constituye un caso especialmente adecuado porque combina una elevada concentración del poder de nombramiento en el Ejecutivo (Cox y Morgenstern, 2001), una consolidada tradición tecnocrática (Centeno y Silva, 1998; Silva, 2009) y un uso reiterado de comisiones *ad hoc* para abordar controversias y problemas de política pública (Aguilera, 2009; Cisternas, 2026). Además, la variación política del período permite examinar cómo diferentes formas de vulnerabilidad se relacionan con las decisiones de composición (Somma et al., 2021; Silva, 2023).

Empíricamente, el estudio se basa en una base de datos original de 69 comisiones *ad hoc* y 903 nombramientos realizados entre 1990 y 2022. La base fue construida a partir de requerimientos de transparencia al Consejo para la Transparencia y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile, complementados con trabajo de archivo en la Biblioteca del Congreso Nacional, revisión de decretos, informes finales, prensa y sitios web institucionales. Mediante modelos logísticos, el artículo evalúa cómo varía la probabilidad de nombrar a expertos, representantes de la sociedad civil, políticos y representantes empresariales en función de dos escenarios de vulnerabilidad política: desaprobación presidencial y la ocurrencia de acontecimientos críticos. El análisis distingue además entre perfiles recurrentes y nuevos, con foco en el rol de los expertos recurrentes. Para captar el entorno político, incorpora además un indicador original de acontecimientos críticos construido a partir de miles de millones de registros mediáticos provenientes de la Global Database of Events, Language, and Tone (GDELT) de Google Jigsaw.

El artículo realiza tres contribuciones. Primero, profundiza la literatura sobre delegación experta al mostrar que la composición constituye un mecanismo de control *ex ante* mediante el cual los gobiernos gestionan la tensión entre autoridad externa y riesgo de agencia. Segundo, conecta esta discusión con los estudios sobre nombramientos discrecionales, mostrando que los criterios de competencia, reputación y legibilidad institucional también estructuran la selección de integrantes en cuerpos asesores externos. Tercero, ofrece evidencia longitudinal sobre 69 comisiones y 903 nombramientos realizados en un sistema presidencial latinoamericano, ampliando una literatura concentrada principalmente en estudios de caso, sectores específicos y democracias europeas (Hunter y Boswell, 2015; Inwood, 2005; Marier, 2009; Owens, 2015). Metodológicamente, el artículo combina investigación de archivo, clasificación semiautomatizada de trayectorias profesionales y mediciones computacionales del contexto político para analizar un fenómeno difícil de observar de manera sistemática.

El artículo se organiza de la siguiente manera. La primera sección desarrolla el marco teórico, conceptualizando las comisiones *ad hoc* como arreglos de delegación controlada y especificando las hipótesis sobre cómo las condiciones del contexto moldean la composición de los nombramientos. La segunda sección describe los datos y la estrategia empírica. Luego, se presentan y discuten los resultados. El artículo concluye con las implicancias de los hallazgos, sus limitaciones y una agenda de investigación futura.

1. Delegación controlada y composición de comisiones ad hoc

Las comisiones ad hoc como instrumentos de delegación controlada

Con la consolidación del paradigma tecnocrático, los ejecutivos han recurrido crecientemente a expertos y actores externos mediante cuerpos asesores temporales, como parte de un proceso más amplio de externalización del asesoramiento de políticas públicas (Craft y Howlett, 2013; González-Bustamante, 2020; Lentsch y Weingart, 2011). Las comisiones *ad hoc* forman parte de este repertorio. Se trata de instancias prelegislativas y temporales, creadas discrecionalmente por el ejecutivo para analizar una materia específica y elaborar informes, diagnósticos o propuestas. Una vez cumplido su mandato, se disuelven (Cisternas y Vásquez, 2018; Hesstvedt y Christiansen, 2021). Su limitada reglamentación entrega a los gobiernos un amplio margen para definir su creación, duración, mandato y composición, lo que las convierte en instrumentos particularmente atractivos de intervención ejecutiva (Cisternas, 2026).

La convocatoria de estas comisiones ofrece distintos beneficios. Permite incorporar conocimiento especializado, ampliar la información disponible y mostrar públicamente que el gobierno busca

soluciones frente a problemas complejos (Hood, 2011; Sulitzeanu-Kenan, 2010). También posibilita integrar a la deliberación a expertos, representantes sectoriales, grupos de interés y organizaciones de la sociedad civil que no participan habitualmente en los procesos gubernamentales de decisión (Cisternas y Vásquez, 2018; Hesstvedt y Christiansen, 2021). Sin embargo, el uso de estos cuerpos no es políticamente neutral. La literatura sobre utilización del conocimiento ha mostrado que la *expertise* puede movilizarse para resolver problemas sustantivos, pero también para fundamentar decisiones previamente adoptadas, legitimar cursos de acción, administrar controversias o desplazar responsabilidades (Boswell, 2008; Radaelli, 1999; Weiss, 1979). En consecuencia, las comisiones pueden ayudar a proyectar capacidad de respuesta, señalar credibilidad, reducir la incertidumbre y mitigar costos políticos, especialmente en momentos de vulnerabilidad gubernamental (Hood, 2011; Weaver, 1986). Los gobiernos las convocan estratégicamente en respuesta a crisis, caídas en la aprobación ciudadana y cambios en las condiciones políticas (Cisternas, 2026; Marier, 2009; Sulitzeanu-Kenan, 2020).

Sin embargo, la delegación en actores externos también genera riesgos. Una comisión puede cuestionar el diagnóstico oficial, formular recomendaciones que diverjan de las preferencias del Ejecutivo o conferir legitimidad a alternativas defendidas por la oposición (Boswell, 2008; Christensen et al., 2022; Hesstvedt y Christensen, 2021; Schrefler, 2010). De esta forma, el gobierno debe equilibrar los beneficios asociados al conocimiento, la credibilidad y la legitimidad externa con la posibilidad de perder el control sobre el diagnóstico del problema, las alternativas consideradas o los costos políticos derivados de las recomendaciones.

Este dilema puede conceptualizarse desde una lógica principal-agente. El gobierno, como principal, delega en una comisión, como agente, la tarea de examinar un problema y elaborar propuestas. El riesgo de agencia surge porque los integrantes poseen información, preferencias y marcos interpretativos propios, por lo que sus recomendaciones pueden alejarse de las prioridades gubernamentales (Epstein y O'Halloran, 1999; Hesstvedt y Christensen, 2021). Para reducir ese riesgo sin renunciar a los beneficios de la asesoría externa, los gobiernos pueden establecer distintos mecanismos de control sobre el mandato, los procedimientos y los participantes (Hesstvedt y Christensen, 2021; Hunter y Boswell, 2015).

Desde esta perspectiva, las comisiones *ad hoc* pueden entenderse como arreglos de delegación controlada. El Ejecutivo abre el proceso de formulación de políticas a actores externos, pero estructura las condiciones bajo las cuales ocurre esa apertura (Hunter y Boswell, 2015). La composición constituye un mecanismo central de control *ex ante*, pues permite seleccionar qué voces, trayectorias, intereses y visiones ingresan al proceso antes de que la comisión inicie su

trabajo (Epstein y O'Halloran, 1999). Los comisionados aportan conocimiento técnico, pero también introducen creencias causales, marcos interpretativos y concepciones normativas acerca de qué problemas importan, qué evidencia resulta válida y qué soluciones son apropiadas (Haas, 1992). Por lo tanto, nombrar integrantes implica seleccionar determinadas formas de interpretar el problema público y delimitar anticipadamente el espacio de alternativas disponibles.

La literatura sobre nombramientos discrecionales y patronazgo ha mostrado que los gobiernos suelen combinar criterios de competencia y confiabilidad al seleccionar personas para posiciones relacionadas con el diseño y la implementación de políticas públicas (Grindle, 2012; Kopecný et al., 2016; Panizza et al., 2022). En el caso de asesores y consejeros, el Ejecutivo necesita conocimiento especializado, pero también cierto grado de confianza, familiaridad o alineamiento con quienes participan en el proceso decisorio (Aberbach y Rockman, 1994; Kopecný et al., 2016). Por esta razón, la selección puede depender de una combinación de capacidades, credenciales profesionales y confiabilidad institucional en un contexto marcado por la asimetría de poder (Grindle, 2012; Panizza et al., 2018a, 2018b).

No obstante, la discrecionalidad presidencial enfrenta una restricción relevante. La credibilidad de una comisión depende de que sus integrantes sean percibidos como competentes, independientes o socialmente relevantes (Zegart, 2004). Los presidentes suelen otorgar una alta visibilidad pública a estas instancias, destacando la racionalidad del procedimiento, la neutralidad de la convocatoria y las credenciales de sus participantes (Cisternas y Vásquez, 2018; Lentsch y Weingart, 2011). En consecuencia, los gobiernos requieren integrantes suficientemente autorizados para conferir legitimidad al proceso, pero también suficientemente previsibles para reducir la incertidumbre sobre sus posibles resultados (Lentsch y Weingart, 2011). Por esta razón, la composición debe combinar credibilidad epistémica y previsibilidad política.

Vulnerabilidad política, autoridad externa y estrategias de delegación

La delegación en una comisión *ad hoc* plantea una tensión que adquiere particular relevancia cuando el gobierno enfrenta vulnerabilidad política (Cisternas, 2026; Sulitzeanu-Kenan, 2020). En estas circunstancias, el Ejecutivo puede obtener mayores beneficios al incorporar actores externos capaces de conferir credibilidad a su respuesta, pero también enfrenta mayores costos si esos actores cuestionan el diagnóstico oficial, visibilizan desacuerdos o formulan recomendaciones incompatibles con sus prioridades (Boswell, 2008; Christensen et al., 2022). Así, la vulnerabilidad aumenta el valor político de la autoridad externa y, al mismo tiempo, la necesidad de reducir la incertidumbre asociada con la delegación.

Sin embargo, la vulnerabilidad política no constituye una condición uniforme. Su naturaleza y su intensidad pueden generar problemas distintos y modificar el valor relativo de los recursos de legitimidad disponibles. La literatura ha mostrado que los gobiernos recurren estratégicamente a comisiones frente a caídas en la aprobación ciudadana, crisis y cambios en el contexto político (Cisternas, 2026; Marier, 2009; Sulitzeanu-Kenan, 2020). Una vez adoptada la decisión de convocarlas, el Ejecutivo todavía debe determinar qué perfiles integrarán la instancia y qué tipos de autoridad serán incorporados al proceso. Este artículo examina dos formas de vulnerabilidad que podrían expresarse en diferentes estrategias de nombramiento: una erosión general y relativamente sostenida de la reputación gubernamental, capturada mediante la desaprobación presidencial, y la exposición a acontecimientos agudos y desestabilizadores, medida a través de la frecuencia y severidad de los eventos críticos.

Por un lado, la desaprobación presidencial expresa una evaluación general del desempeño gubernamental y refleja un deterioro difuso del apoyo ciudadano (Hood, 2011; Silva, 2009). En estos escenarios, los presidentes enfrentan incentivos para gestionar su reputación, mostrar capacidad de respuesta y reducir su asociación con decisiones, instituciones o personas sometidas a cuestionamiento (González-Bustamante, 2025; Manza et al., 2002). Las comisiones *ad hoc* pueden contribuir a estos objetivos porque permiten proyectar proactividad y abrir el proceso de formulación de políticas a actores externos, distanciándose de la política institucional criticada (Cisternas, 2026).

La incorporación de expertos podría constituir una respuesta posible frente a la desaprobación, pues sus credenciales permiten presentar el asesoramiento como fundado en conocimiento y evidencia (Camerlo y Pérez-Liñán, 2015; Hunter y Boswell, 2015; Marier, 2009). Sin embargo, cuando la vulnerabilidad adopta la forma de una pérdida generalizada de apoyo, el problema político no se limita a la capacidad técnica del gobierno. También involucra su receptividad y su conexión con los sectores afectados por las decisiones públicas. En estas circunstancias, el valor marginal de ampliar la representación social puede ser especialmente alto.

La incorporación de representantes de la sociedad civil permite canalizar institucionalmente demandas sociales, proyectar apertura y mostrar disposición a escuchar voces externas a la política institucional (Cisternas y Vásquez, 2018). Esta estrategia puede reforzar la legitimidad representativa de la comisión, independientemente de la incertidumbre del proceso. En cambio, la presencia visible de actores políticos puede debilitar esa señal de apertura. Cuando el gobierno y las élites políticas enfrentan una evaluación negativa, una comisión integrada por figuras

procedentes de la misma esfera puede ser percibida como una prolongación de las instituciones cuestionadas (Panizza et al., 2018a). De esta lógica se derivan las primeras dos hipótesis:

H1. A medida que aumenta la desaprobación presidencial, aumenta la probabilidad de nombrar representantes de la sociedad civil.

H2. A medida que aumenta la desaprobación presidencial, disminuye la probabilidad de nombrar actores políticos.

Los eventos críticos plantean un problema distinto. Escándalos, accidentes de gran magnitud, movilizaciones masivas o crisis institucionales generan focos concretos de incertidumbre y aumentan la presión para producir diagnósticos y respuestas en un período acotado (Broekema et al., 2018; Sulitzeanu-Kenan, 2020). A diferencia de la desaprobación, que expresa una evaluación agregada del desempeño gubernamental, estos acontecimientos concentran la atención pública en problemas delimitados y elevan la demanda por capacidad de respuesta.

En estas circunstancias, la autoridad experta puede adquirir un valor particular. Las credenciales profesionales permiten presentar la respuesta gubernamental como fundada en conocimiento especializado, racionalidad y evidencia, contribuyendo a reducir la percepción de arbitrariedad y a distanciar el proceso de la controversia partidaria (Boin et al., 2016; Hood, 2011; Manza et al., 2002; Marier, 2009). La incorporación de expertos también puede señalar que el gobierno reconoce la complejidad del problema y está dispuesto a someterlo a un estudio especializado. Esta función reputacional resulta especialmente relevante cuando el Ejecutivo debe mostrar capacidad de diagnóstico bajo condiciones de incertidumbre (Kopecký et al., 2012; Muller, 2006; Panizza et al., 2018b; Zegart, 2004).

Los eventos críticos también podrían generar incentivos para ampliar la representación de los grupos afectados. Sin embargo, la urgencia y la demanda por respuestas técnicamente defendibles hacen esperable que aumente, en términos agregados, el valor de los perfiles expertos. De esta expectativa se deriva la tercera hipótesis:

H3. A mayor número de eventos críticos, mayor es la probabilidad de nombrar expertos.

Cuando los eventos críticos alcanzan mayor severidad, se intensifica la tensión entre autoridad externa y riesgo de agencia. Los acontecimientos más disruptivos generan mayor atención pública, aumentan la urgencia de producir una respuesta creíble y elevan los costos políticos de que la comisión formule diagnósticos o recomendaciones que el Ejecutivo no pueda gestionar (Cisternas, 2026; Christensen et al., 2022). En estos contextos, el gobierno necesita preservar la autoridad

externa de la asesoría, pero también enfrenta mayores incentivos para reducir la incertidumbre asociada con la selección de sus integrantes.

Una estrategia posible consiste en privilegiar expertos que ya han participado en comisiones anteriores. Estos perfiles ofrecen una combinación de recursos especialmente útil: mantienen las credenciales profesionales que sostienen la legitimidad técnica de la instancia y poseen una trayectoria observable dentro del circuito asesor (Dargent, 2015; Orozco, 2016; Stone, 1996). La participación previa no demuestra afinidad partidaria, lealtad personal ni subordinación al gobierno que realiza el nuevo nombramiento. De hecho, algunas designaciones anteriores pueden haber ocurrido bajo administraciones diferentes. Tampoco permite inferir que el Ejecutivo conozca plenamente las preferencias o futuras recomendaciones del experto.

La relevancia de la experiencia previa radica en la información institucional que puede aportar esa trayectoria. La participación anterior indica que la persona conoce los procedimientos de estos cuerpos, ha intervenido en procesos colegiados de asesoramiento y ha desarrollado una trayectoria pública susceptible de ser considerada al momento de un nuevo nombramiento. También puede ofrecer señales sobre sus orientaciones profesionales, sus estilos de trabajo y su forma de relacionarse con el ejecutivo (Dargent, 2015; Joignant, 2011; Panizza et al., 2018a). En este sentido, la recurrencia funciona como una señal de legibilidad institucional: reduce parte de la incertidumbre asociada con la selección sin eliminar la condición externa y experta que confiere autoridad a la comisión.

Siguiendo la literatura sobre nombramientos discrecionales, la recurrencia puede operar además como un indicador de confianza y familiaridad institucional dentro de un circuito restringido de asesoría experta (Kopecký et al., 2016; Panizza et al., 2018a). Esta confianza no supone necesariamente cercanía personal o alineamiento partidario. Puede derivarse de una trayectoria previamente observable, de la reputación acumulada y de la experiencia compartida en espacios de asesoramiento. La discrecionalidad presidencial para seleccionar estos perfiles también puede introducir una forma menos visible de politización, en la medida en que el Ejecutivo decide qué conocimientos y trayectorias ingresan al proceso bajo criterios públicamente presentados como mérito, racionalidad y neutralidad técnica (Panizza et al., 2018b; Peters, 2013).

En consecuencia, la selección de expertos recurrentes puede operar como un mecanismo de control *ex ante*. El Ejecutivo conserva la legitimidad derivada de incorporar conocimiento especializado y actores percibidos como externos, mientras selecciona perfiles cuya trayectoria dentro del circuito de comisiones resulta previamente observable. Este mecanismo no garantiza el control sobre las deliberaciones o recomendaciones posteriores, pero permite, de manera más

acotada, reducir la incertidumbre de selección en momentos en que los costos de agencia son particularmente elevados (Ashforth, 1990; Boswell, 2008; Salter, 1988; Schrefler, 2010). De esta lógica se deriva la cuarta hipótesis:

H4. A medida que aumenta el número de eventos críticos severos, aumenta la probabilidad de nombrar expertos recurrentes.

En conjunto, las hipótesis sostienen que la composición de las comisiones depende de la naturaleza e intensidad de la vulnerabilidad política. La desaprobación presidencial aumenta el valor de la apertura representativa y de la distancia respecto de la política institucional. Los eventos críticos generan una demanda más focalizada por autoridad experta, mientras que su mayor severidad incrementa el valor de seleccionar perfiles con experiencia previamente observable dentro del circuito asesor. Las tres primeras hipótesis se refieren a la distribución entre categorías generales de integrantes; la cuarta examina una diferencia dentro de la categoría experta. Desde esta perspectiva, la composición constituye una dimensión política del diseño de las comisiones mediante la cual el Ejecutivo decide qué fuentes de legitimidad incorpora y cómo gestiona los riesgos asociados con la delegación.

2. Metodología

Caso de estudio y fuentes de datos

Este estudio recopila información original y única sobre el contexto político e institucional en el que emergen las comisiones asesoras *ad hoc* en Chile entre 1990 y 2022. El análisis empírico se basa en una base de datos longitudinal original de 69 comisiones asesoras *ad hoc* y 903 nombramientos realizados durante siete administraciones presidenciales: Patricio Aylwin (1990–1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994–2000), Ricardo Lagos (2000–2006), Michelle Bachelet I (2006–2010), Sebastián Piñera I (2010–2014), Michelle Bachelet II (2014–2018) y Sebastián Piñera II (2018–2022).

La base fue construida mediante una estrategia de múltiples fuentes. En primer lugar, se realizaron requerimientos de transparencia al Consejo para la Transparencia y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile. En segundo lugar, esta información fue complementada con trabajo de archivo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, revisión sistemática de decretos presidenciales, informes finales de las comisiones, prensa y sitios web institucionales. Se incluyeron aquellas comisiones que cumplían dos criterios: (1) contar con un mandato temporal y *ad hoc* claramente definido, y (2) estar compuestas principalmente por actores externos al gobierno. Se

excluyeron cuerpos asesores permanentes y comisiones integradas predominantemente por funcionarios gubernamentales.

Para cada nombramiento se reconstruyeron atributos biográficos y profesionales de la persona designada, incluyendo género, edad, nivel educacional, trayectoria y afiliación política. Esta información permitió identificar la identidad profesional predominante de cada integrante y clasificar el ámbito social representado en la comisión.

Unidad de análisis y variable dependiente

La unidad de análisis es el nombramiento individual, entendido como un asiento ocupado por un determinado perfil dentro de una comisión. La base contiene 903 nombramientos correspondientes a 707 personas únicas, agrupados en 69 comisiones. Dado que una misma persona puede participar en más de una instancia, la unidad de análisis no corresponde a individuos únicos, sino a nombramientos. Esta distinción resulta central para el argumento del artículo, ya que la recurrencia de ciertos integrantes constituye una de las dimensiones de la delegación controlada que se busca explicar.

El análisis se concentra en comisiones efectivamente creadas. Por tanto, los modelos no estiman la probabilidad de convocar una comisión ni comparan a las personas nombradas con el universo completo de candidatos potenciales. Los resultados deben interpretarse como asociaciones entre las condiciones políticas previas a la creación de una comisión y los perfiles observados entre los nombramientos realizados.

La clasificación inicial de la variable dependiente distingue cinco categorías, siguiendo y adaptando la tipología de Christensen y Hesstvedt (2019). La primera categoría corresponde a expertos, definidos como personas cuya trayectoria principal se encuentra vinculada con universidades, centros de investigación o think tanks, incluidos profesores, investigadores y autoridades académicas. La segunda comprende a representantes empresariales, correspondientes a personas vinculadas principalmente con empresas, asociaciones gremiales, directorios, inversiones o cargos ejecutivos en el sector privado. La tercera categoría incluye a representantes de la sociedad civil, como integrantes de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, movimientos sociales, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro no vinculadas principalmente con el gobierno o el sector empresarial. La cuarta corresponde a actores políticos, incluidos autoridades electas, ministros, subsecretarios, alcaldes, parlamentarios, gobernadores, dirigentes partidarios y personas cuya trayectoria predominante se desarrolla en la

política institucional. La quinta categoría, desconocido, identifica los casos que no disponían de información suficiente para ser asignados inicialmente a alguno de los cuatro perfiles sustantivos.

Procedimiento de clasificación

La clasificación se realizó mediante un procedimiento semiautomatizado que combinó el análisis de múltiples modelos de lenguaje de gran escala con la revisión manual de los casos ambiguos. Cada registro fue evaluado independientemente por seis modelos: DeepSeek-v3p1, GPT-4.1, GPT-4o, GPT-5, o3 y o4-mini. Todos recibieron la misma información biográfica, las mismas definiciones de las categorías y las mismas instrucciones de clasificación. El uso de varios modelos permitió reducir la dependencia de las decisiones de un único sistema e identificar los perfiles en los que la información disponible producía clasificaciones divergentes.

Para cada registro se calculó el nivel de acuerdo entre los seis modelos. Los casos con una categoría modal inequívoca fueron clasificados mediante el consenso multimodelo. Se estableció un mínimo de tres coincidencias para aceptar una clasificación automatizada, siempre que esa categoría constituyera una moda inequívoca. Los casos con empate entre categorías o con menos de tres coincidencias fueron remitidos a adjudicación manual. En total, 803 nombramientos recibieron una clasificación en la etapa automatizada. Los 100 casos sin acuerdo suficiente fueron identificados como conflictivos y sometidos a revisión manual. También se revisaron los cuatro registros clasificados inicialmente como desconocidos.

Tabla 1. Acuerdo entre modelos y procedimiento de clasificación

Acuerdo entre modelos	Nombramientos	Procedimiento
6 de 6 modelos, 100%	318	Clasificación por consenso completo
5 de 6 modelos, 83,3%	209	Clasificación por categoría modal
4 de 6 modelos, 66,7%	142	Clasificación por categoría modal
3 de 6 modelos, 50%	134	Clasificación por categoría modal inequívoca
Sin acuerdo suficiente	100	Revisión y adjudicación manual
Total	903	

La adjudicación manual incluyó búsquedas biográficas adicionales y el contraste de información procedente de decretos, informes de las comisiones, sitios institucionales, perfiles profesionales y prensa. La categoría definitiva se asignó considerando la trayectoria profesional u ocupacional predominante de cada persona. Tras la adjudicación manual, los 903 nombramientos quedaron

distribuidos en 492 expertos (54,5%), 154 representantes empresariales (17,1%), 143 representantes de la sociedad civil (15,8%) y 114 actores políticos (12,6%). A partir de esta clasificación final se construyeron cuatro variables dependientes binarias, cada una de las cuales toma valor uno cuando el nombramiento corresponde al perfil respectivo ($X = 1$) y cero en los demás casos ($X = 0$).

Este procedimiento combina consenso entre modelos y revisión humana dirigida a los casos con mayor incertidumbre. Las instrucciones proporcionadas a los modelos, las definiciones completas de las categorías y mayores detalles sobre la resolución de los casos conflictivos se presentan en el Apéndice.

Operacionalización de la experiencia previa

Para evaluar si el Ejecutivo selecciona perfiles previamente incorporados al circuito asesor, el análisis mide la experiencia anterior de cada integrante en comisiones *ad hoc*. La experiencia previa se mide a partir de la participación observada de cada persona en comisiones *ad hoc* anteriores dentro de la base de datos. Para cada nombramiento, se calculó si la persona había participado en al menos una comisión previa antes del mes de la comisión actual. A partir de esta información se construyeron tres medidas. La primera es una variable dicotómica que identifica si la persona tenía cualquier experiencia previa en comisiones. La segunda identifica si la persona había participado en dos o más comisiones previas. La tercera corresponde al número acumulado de comisiones anteriores en las que la persona había participado. Estas variables capturan trayectorias observables dentro del universo de comisiones estudiado.

También se construyó una variable específica para identificar expertos recurrentes. Esta variable toma valor uno ($X = 1$) cuando el integrante pertenece a la categoría experto y, además, cuenta con experiencia previa en comisiones *ad hoc*. Para contrastar si la vulnerabilidad severa se asocia con *expertise* en general o con *expertise* familiar, se creó una variable adicional que identifica expertos nuevos, es decir, sin experiencia previa observada en comisiones.

Variables independientes

Las principales variables independientes capturan el contexto político previo a la creación de cada comisión. La primera variable independiente es la desaprobación presidencial. Esta se mide mediante un indicador mensual continuo proveniente del Executive Approval Project (Carlin et al., 2023). La variable captura el porcentaje de personas que desaprueba el desempeño presidencial. Teóricamente, una mayor desaprobación refleja mayor vulnerabilidad reputacional del gobierno y puede aumentar los incentivos para nombrar perfiles más representativos de la opinión pública.

La segunda variable corresponde a los eventos críticos, entendidos como incidentes estocásticos e imprevistos que pueden aumentar la vulnerabilidad política y desestabilizar gobiernos (Camerlo y Pérez-Liñán, 2015; González-Bustamante, 2025; Martínez-Gallardo, 2014). Siguiendo la estrategia desarrollada en Cisternas (2026), se construye un indicador discreto a partir de la Global Database of Events, Language, and Tone (GDELT) de Google Jigsaw. GDELT es una robusta herramienta para evaluar la vulnerabilidad política que registra eventos noticiosos en tiempo real en formato diádico y les asigna un puntaje Goldstein que varía entre -10 y $+10$, indicando su potencial efecto estabilizador o desestabilizador (Goldstein, 1992; Saz-Carranza et al., 2020). Esto opera como un sismógrafo del escenario político, donde algunos eventos producen pequeños temblores y otros mayores disrupciones (Cisternas, 2026). Se consideran únicamente eventos en los que Chile aparece como actor receptor y cuyo puntaje de Goldstein es menor o igual a cero, lo que permite capturar acciones desestabilizadoras como protestas, amenazas, coerción, conflicto, violencia no convencional, entre otros. Para facilitar la interpretación de los coeficientes, el número mensual de eventos críticos se expresa en miles, de modo que una unidad representa un incremento de mil eventos. Para capturar eventos extremadamente críticos, se crea una submuestra con los incidentes que puntúan -10 y que se caracterizan por involucrar violencia física.

Las variables independientes principales, desaprobación y eventos críticos, se rezagan un mes respecto de la fecha de creación de la comisión, siguiendo el enfoque de Cisternas (2026) y Sulitzeanu-Kenan (2010). Esta decisión responde a la necesidad de capturar las condiciones políticas inmediatamente anteriores al nombramiento y es consistente con los tiempos administrativos y políticos que suelen mediar entre la decisión de crear una comisión y su formalización.

Variables de control

Los modelos principales incorporan controles por tamaño de la comisión y variables político-institucionales, como la proporción de escaños legislativos de la coalición de gobierno, la fragmentación de la oposición y la ideología del gobierno. El tamaño de la comisión se mide como el número total de integrantes nombrados en cada instancia. Esta variable permite controlar que comisiones más grandes puedan ofrecer mayor espacio para incluir perfiles diversos o integrantes recurrentes.

La proporción legislativa de la coalición de gobierno se mide mediante el porcentaje de escaños controlado por los partidos que integran el gobierno. Para facilitar la interpretación de los coeficientes, la variable se expresa en incrementos de diez puntos porcentuales. La fragmentación de la oposición captura la dispersión de los partidos opositores. La ideología del gobierno distingue

entre gobiernos de centroizquierda, correspondientes a la Concertación y la Nueva Mayoría, y gobiernos de centroderecha, correspondientes a la Alianza por Chile y Chile Vamos. Estas variables permiten evaluar si las condiciones institucionales y partidarias del Ejecutivo moldean los incentivos de nombramiento. Estas variables utilizan la base de datos de instituciones políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Cruz et al. 2021).

Con respecto a la experiencia previa, dado que esta es acumulativa por construcción, los modelos incorporan un control por la estructura temporal de oportunidad. Esta variable mide el número de comisiones que habían ocurrido antes del mes de la comisión actual. Su inclusión permite controlar que la recurrencia sea más probable en etapas posteriores del período simplemente porque existen más comisiones anteriores disponibles para producir experiencia previa.

Los atributos individuales no se incorporan como controles en los modelos principales, ya que varios de ellos forman parte de la definición sustantiva de los perfiles analizados. Controlar por rasgos que constituyen la categoría dependiente podría bloquear parte del fenómeno de interés. Por ello, el artículo prioriza controles de contexto político e institucional y utiliza los atributos individuales para la clasificación de perfiles.

Estrategia analítica

La estrategia principal utiliza modelos logísticos binarios para estimar por separado la probabilidad de nombrar expertos, actores políticos, representantes empresariales y miembros de la sociedad civil. Este enfoque permite evaluar directamente cada resultado sin imponer que el aumento de una categoría se interprete necesariamente como una disminución proporcional de otra. Los modelos centrales de recurrencia estiman la probabilidad de nombrar expertos recurrentes y expertos nuevos.

Debido a que los nombramientos están agrupados en comisiones, las estimaciones utilizan errores estándar agrupados por comisión. Las variables principales varían en ese nivel, mientras los perfiles dependen del nombramiento individual. Por esta razón, los coeficientes se interpretan como asociaciones entre el contexto político de cada comisión y la probabilidad de observar determinados perfiles entre sus integrantes.

La presentación de los resultados se organiza en dos bloques. El primero evalúa cómo la desaprobación presidencial y los eventos críticos se relacionan con la composición general de las comisiones, distinguiendo entre expertos, sector empresarial, sociedad civil y política. Este bloque permite evaluar si la vulnerabilidad derivada de la desaprobación produce una recomposición representativa (H1) y una despolitización más directa (H2). El segundo bloque evalúa si frente a

una mayor frecuencia de eventos críticos, aumenta el llamado a expertos (H3) y si frente a eventos particularmente sensibles, aumenta el nombramiento de expertos recurrentes (H4). Esta última incorpora un control por la estructura temporal de oportunidad para distinguir la selección de perfiles experimentados de la acumulación mecánica de posibilidades de recurrencia a lo largo del período.

Como análisis complementario, se examinó si el patrón de recurrencia observado entre los expertos se extendía a integrantes de otros perfiles. Para esto, se estimaron modelos logísticos sobre la probabilidad de nombrar personas con alguna experiencia previa en comisiones y personas con dos o más participaciones anteriores. Los resultados se presentan en el Apéndice.

Finalmente, se realizan pruebas de robustez utilizando medidas alternativas de los eventos críticos severos, incluida una definición más amplia que incorpora puntajes Goldstein entre -8 y -10 , así como una transformación logarítmica del conteo. También se reestiman los modelos excluyendo 2019, 2020, ambos años conjuntamente y el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y se aplican pruebas de exclusión sucesiva por administración. Estas especificaciones permiten evaluar si la asociación principal depende de una operacionalización particular de la severidad, de períodos de excepcional intensidad política o de una administración específica. Los resultados se presentan en el Apéndice.

3. Resultados

Los resultados muestran que las distintas formas de vulnerabilidad política se asocian con estrategias de composición diferentes. En particular, se examina cómo la composición de las comisiones *ad hoc* varía frente a tres condiciones políticas: la desaprobación presidencial, la frecuencia general de eventos críticos y la ocurrencia de eventos críticos severos.

Todos los modelos incorporan controles por tamaño de la comisión, proporción de escaños de la coalición de gobierno, fragmentación de la oposición e ideología del gobierno, con errores estándar agrupados por comisión. Los análisis de recurrencia y experiencia previa incluyen, además, un control por el número de comisiones existentes antes del mes del nombramiento.

3.1. Vulnerabilidad política y composición general

La Tabla 2 presenta los modelos para los cuatro perfiles principales de integrantes: expertos, sector empresarial, sociedad civil y política. Con respecto al primer escenario evaluado, la desaprobación presidencial se asocia positivamente con el nombramiento de representantes de la sociedad civil ($\beta = 0.043$, $p < 0.01$), respaldando H1. Al mismo tiempo, se asocia negativamente con el nombramiento de actores políticos ($\beta = -0.043$, $p < 0.01$), respaldando H2. Este patrón sugiere

que la pérdida de apoyo presidencial activa una respuesta orientada hacia la apertura representativa de sectores de la sociedad civil. Frente a una vulnerabilidad reputacional difusa, los gobiernos parecen incorporar actores capaces de proyectar inclusión y conexión con sectores sociales, mientras reducen la presencia de perfiles directamente vinculados con la política institucional.

Los eventos críticos generales no presentan asociaciones significativas al nivel de $p < 0.01$ con ninguno de los cuatro perfiles. Por tanto, los resultados no respaldan la expectativa de que una mayor frecuencia de eventos críticos produzca un aumento general de la presencia experta (H3). De forma similar, la medida de eventos críticos severos no presenta coeficientes significativos al nivel de $p < 0.01$ para ninguno de los cuatro perfiles.

En conjunto, los resultados muestran que la desaprobación presidencial se asocia con una recomposición representativa de las comisiones, caracterizada por una mayor incorporación de sociedad civil y una menor presencia de actores políticos. Por otro lado, los eventos críticos generales y severos no producen una tecnocratización general de las comisiones.

Tabla 2. Vulnerabilidad política y nombramiento de perfiles

	Expertos	Representantes empresariales	Sociedad civil	Actores políticos
Desaprobación presidencial				
Desaprobación presidencial	0.013 (0.011)	-0.019** (0.009)	0.043*** (0.017)	-0.043*** (0.009)
Constante	-4.153 (3.589)	3.961 (4.254)	-0.681 (4.736)	5.197 (4.351)
N	903	903	903	903
Log likelihood	-612.270	-398.376	-362.235	-323.255
AIC	1236.539	808.753	736.471	658.510
Eventos críticos				
Eventos críticos	0.206 (0.132)	-0.319* (0.177)	0.202 (0.166)	-0.279 (0.189)
Constante	-2.240 (3.439)	1.123 (4.193)	2.676 (4.891)	-0.244 (4.588)
N	903	903	903	903
Log likelihood	-611.625	-398.040	-372.094	-332.012
AIC	1235.249	808.080	756.189	676.025
Eventos críticos severos				
Eventos críticos severos	0.002** (0.001)	-0.003** (0.001)	0.000 (0.001)	-0.002 (0.001)
Constante	-1.830 (3.424)	0.398 (4.186)	1.335 (5.000)	-0.604 (4.604)
N	903	903	903	903
Log likelihood	-609.894	-397.088	-373.470	-331.831
AIC	1231.788	806.175	758.940	675.662
Controles incluidos				
Tamaño de la comisión	Sí	Sí	Sí	Sí
Proporción de escaños de la coalición de gobierno	Sí	Sí	Sí	Sí
Fragmentación de la oposición	Sí	Sí	Sí	Sí
Gobierno de derecha	Sí	Sí	Sí	Sí

Nota: Coeficientes beta; errores estándar agrupados por comisión entre paréntesis. Los eventos críticos se expresan en miles y la proporción de escaños de la coalición de gobierno en incrementos de diez puntos porcentuales. * $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

3.2. Eventos críticos y nombramiento de expertos recurrentes

La Tabla 3 distingue entre expertos recurrentes, definidos como aquellos que habían participado en al menos una comisión anterior, y expertos nuevos, sin experiencia previa observada en el circuito de comisiones *ad hoc*. Esta distinción permite evaluar si los gobiernos responden a la presión política incorporando *expertise* en términos generales o seleccionando perfiles que combinan credenciales académicas con familiaridad institucional.

La desaprobación presidencial no se asocia significativamente con el nombramiento de expertos recurrentes ni de expertos nuevos. Este resultado es consistente con el patrón observado en la composición general: la respuesta frente a la pérdida de apoyo parece operar mediante la representación social, antes que mediante una mayor incorporación de *expertise*.

El patrón cambia frente a los eventos críticos generales. Cada incremento de mil eventos presenta una asociación positiva con el nombramiento de expertos recurrentes ($\beta = 0.451$, $p < 0.01$), mientras que no se observa una asociación significativa con los expertos nuevos. Los eventos críticos severos profundizan esta misma lógica. La medida estricta de eventos con puntaje Goldstein de -10 se asocia positiva y significativamente con el nombramiento de expertos recurrentes ($\beta = 0.002$, $p < 0.01$), sin presentar una asociación equivalente con los expertos nuevos. Este resultado respalda H4 y sugiere que, bajo mayor severidad, el Ejecutivo privilegia perfiles que combinan autoridad experta y experiencia previa dentro del circuito asesor.

Estos resultados muestran que los gobiernos no incorporan indiscriminadamente a más expertos frente a los eventos críticos. Seleccionan con mayor frecuencia a quienes ya cuentan con experiencia en comisiones anteriores.

Tabla 3. Vulnerabilidad política y nombramiento de expertos recurrentes y nuevos

	Experto recurrente	Experto nuevo
Desaprobación presidencial		
Desaprobación presidencial	0.019 (0.018)	-0.011 (0.013)
Constante	1.176 (5.614)	-6.147* (3.443)
N	903	903
Log likelihood	-352.744	-603.342
AIC	719.489	1220.684
Eventos críticos		
Eventos críticos	0.451*** (0.168)	-0.217 (0.166)
Constante	6.004 (6.903)	-8.014** (3.670)
N	903	903
Log likelihood	-346.904	-602.205
AIC	707.807	1218.411
Eventos críticos severos		
Eventos críticos severos	0.002*** (0.001)	-0.001 (0.001)
Constante	5.521 (6.261)	-7.571** (3.602)
N	903	903
Log likelihood	-346.623	-603.017
AIC	707.247	1220.035
Controles incluidos		
Tamaño de la comisión	Sí	Sí
Proporción de escaños de la coalición de gobierno	Sí	Sí
Fragmentación de la oposición	Sí	Sí
Gobierno de derecha	Sí	Sí
Oportunidad temporal	Sí	Sí

Nota: Coeficientes beta; errores estándar agrupados por comisión entre paréntesis. Los eventos críticos se expresan en miles y la proporción de escaños de la coalición de gobierno en incrementos de diez puntos porcentuales. * $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

Pruebas de robustez y análisis complementario

Las pruebas de robustez y el análisis complementario se presentan en el Apéndice y confirman especialmente el resultado referido a los expertos recurrentes. La asociación positiva se mantiene cuando los eventos severos se miden mediante una definición amplia, que incluye puntajes Goldstein entre -8 y -10 , y cuando el conteo de la medida estricta se transforma logarítmicamente. En las tres especificaciones, estricta, amplia y logarítmica, los eventos severos se asocian positivamente con el nombramiento de expertos recurrentes, lo que muestra que el hallazgo no depende de una única operacionalización de la severidad.

Las medidas alternativas también ofrecen evidencia complementaria de una disminución de los nombramientos empresariales. En particular, la transformación logarítmica de los eventos severos presenta una asociación negativa y significativa con el nombramiento de representantes empresariales ($\beta = -0.208$, $p < 0.01$). Esta asociación no alcanza el mismo nivel de significación estadística en las especificaciones lineales estricta y amplia, por lo que se interpreta como evidencia complementaria.

El resultado sobre expertos recurrentes también se mantiene al excluir 2019, 2020, ambos años conjuntamente y el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Estas estimaciones indican que la asociación no está impulsada exclusivamente por el estallido social, la pandemia o una administración particular. Las pruebas de exclusión sucesiva por administración ofrecen una comprobación adicional de la estabilidad del resultado.

Por último, los análisis complementarios muestran que los eventos críticos también se asocian con medidas generales de experiencia previa. Los eventos críticos generales se relacionan con una mayor probabilidad de nombrar personas con dos o más participaciones anteriores. Los eventos severos se asocian tanto con alguna experiencia previa como con dos o más participaciones. Dado que estas medidas incluyen a los expertos recurrentes, los resultados no permiten establecer si el patrón se extiende de manera independiente a otros perfiles.

4. Conclusión

Este artículo examinó cómo los presidentes utilizan la composición de las comisiones *ad hoc* para gestionar la tensión entre credibilidad externa y riesgo de agencia frente a distintas formas de vulnerabilidad política. El argumento central sostiene que estas instancias funcionan como arreglos de delegación controlada, en los cuales la selección de integrantes opera como un mecanismo de control *ex ante*. Mediante los nombramientos, el Ejecutivo puede incorporar conocimiento, representación y legitimidad externos, mientras reduce la incertidumbre derivada de delegar en

actores cuyas perspectivas o recomendaciones pueden diferir de sus prioridades. Los resultados muestran que esta estrategia varía según la naturaleza y la intensidad de la vulnerabilidad enfrentada.

Los primeros hallazgos se refieren a la vulnerabilidad reputacional. Una mayor desaprobación presidencial se asocia con una mayor probabilidad de nombrar representantes de la sociedad civil, respaldando H1, y con una menor probabilidad de incorporar actores políticos, apoyando H2. Frente a un deterioro general del apoyo ciudadano, los gobiernos parecen ampliar la representación social y reducir la presencia de perfiles vinculados con la política institucional (González-Bustamante, 2025; Manza et al., 2002). Este patrón es consistente con una estrategia de legitimación representativa: la inclusión de actores de la sociedad civil permite proyectar receptividad y apertura, mientras la reducción de perfiles políticos distancia la comisión de las élites sometidas a cuestionamiento. Las comisiones pueden operar así como señales públicas de escucha y capacidad de respuesta, vinculadas con la gestión reputacional, la legitimación y la evasión de culpas (Cisternas, 2026; Hood, 2011; Sulitzeanu-Kenan, 2010; Weaver, 1986).

Los eventos críticos producen un patrón diferente. Su frecuencia general no se asocia con un aumento estadísticamente significativo del nombramiento de expertos, por lo que H3 no recibe apoyo. Tampoco se observa una reasignación significativa hacia actores políticos, empresariales o representantes de la sociedad civil. La necesidad de mostrar capacidad de diagnóstico no se traduce, por tanto, en una tecnocratización general de las comisiones. Sin embargo, la desagregación de la categoría experta revela una diferencia sustantiva. Los eventos críticos se asocian con una mayor probabilidad de nombrar expertos recurrentes, pero no expertos nuevos. Los eventos críticos severos muestran el mismo patrón y respaldan H4. La asociación se mantiene con medidas alternativas de severidad y al excluir períodos o administraciones de especial intensidad política. La diferencia entre H3 y H4 resulta central: los eventos críticos no modifican cuántos expertos reciben un asiento, pero sí qué expertos.

En conjunto, los resultados identifican dos estrategias. Frente a la vulnerabilidad reputacional, los gobiernos recurren a la legitimación representativa, ampliando la presencia de la sociedad civil y reduciendo la de actores políticos. Frente a acontecimientos focalizados, los gobiernos no incorporan indiscriminadamente más *expertise* sino que privilegian autoridad experta acompañada de legibilidad institucional, es decir, expertos cuya actuación previa en las comisiones resulta observable y, de cierta forma, previsible.

El artículo realiza tres contribuciones. Primero, amplía la literatura sobre delegación experta al mostrar que el control presidencial no termina con la decisión de crear una comisión. Estas

instancias pueden incorporar conocimiento y proyectar neutralidad, pero también cuestionar diagnósticos gubernamentales o formular recomendaciones políticamente inconvenientes (Boswell, 2008; Christensen et al., 2022; Schrefler, 2010). La composición permite estructurar anticipadamente el asesoramiento mediante la selección de determinadas trayectorias, experiencias y formas de conocimiento (Epstein y O'Halloran, 1999; Hesstvedt y Christensen, 2021).

Este mecanismo también permite identificar una forma menos visible de politización. El Ejecutivo puede influir mediante la decisión sobre qué conocimientos y trayectorias acceden al proceso bajo criterios presentados como mérito, racionalidad y neutralidad técnica. La recurrencia puede reflejar confianza y familiaridad institucional, aunque no constituye evidencia de lealtad, alineamiento partidario o subordinación. Su relevancia radica en que proporciona información previa sobre la experiencia de una persona en estos espacios y reduce parcialmente la incertidumbre de selección.

Segundo, el estudio muestra la importancia de distinguir entre formas de vulnerabilidad. La desaprobación presidencial constituye una evaluación agregada del desempeño gubernamental, mientras los eventos críticos concentran la atención en problemas específicos y generan presiones más inmediatas. Esta distinción ayuda a explicar por qué la vulnerabilidad no produce una estrategia única de composición.

Tercero, el análisis demuestra la necesidad de estudiar la composición por debajo de las categorías agregadas. Una comisión puede mantener estable su proporción de expertos y concentrar sus nombramientos en personas que participaron en instancias anteriores. La distinción entre expertos recurrentes y nuevos revela una dimensión de la selección presidencial que permanece invisible cuando todos los perfiles especializados son tratados como equivalentes.

Los hallazgos deben interpretarse considerando varias limitaciones. El diseño es observacional y se concentra en comisiones efectivamente creadas, por lo que identifica asociaciones condicionadas a la decisión previa de convocarlas y no permite establecer causalidad. Tampoco compara a los nombrados con el universo completo de candidatos potenciales. El área de política pública, la complejidad técnica, las características del mandato, la disponibilidad de especialistas y las redes profesionales pueden incidir también en la composición. El diseño no permite observar directamente las motivaciones presidenciales, los vínculos informales ni el contenido de las deliberaciones. Metodológicamente, la experiencia previa se reconstruye únicamente dentro del universo de comisiones identificado entre 1990 y 2022, lo que puede subestimar trayectorias desarrolladas en otros cuerpos consultivos. El indicador de eventos críticos basado en GDELT capta fluctuaciones generales del contexto político y mediático, pero no vincula necesariamente cada nombramiento con un acontecimiento específico.

La investigación futura debería comparar estos patrones en otros sistemas presidenciales y parlamentarios, examinar variaciones entre áreas de política pública y vincular acontecimientos específicos con la creación y composición de cada comisión. Estudios de caso, entrevistas y análisis de redes permitirían evaluar con mayor precisión el papel de la confianza, la familiaridad y las afinidades políticas en la construcción de las listas de integrantes. También será necesario estudiar si la recurrencia experta y la inclusión de la sociedad civil afectan las deliberaciones, el contenido de las recomendaciones y su posterior adopción.

Referencias

- Aberbach, Joel D., y Bert A. Rockman. 1994. "Civil Servants and Policymakers: Neutral or Responsive Competence?" *Governance* 7 (4): 461–469.
- Aguilera, Carolina. 2009. *Un análisis de las comisiones asesoras presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet*. Santiago: FLACSO.
- Ashforth, Adam. 1990. "Reckoning Schemes of Legitimation: On Commissions of Inquiry as Power/Knowledge Forms." *Journal of Historical Sociology* 3 (1): 1–22.
- Bressers, D., M. Twist, M. Steen, and J. Schulz. 2017. "The Contested Autonomy of Policy Advisory Bodies." In *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe*, 1189–1211. Springer.
- Boin, Arjen, Paul 't Hart, Eric Stern, and Bengt Sundelius. 2016. *The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316339756>.
- Boswell, Christina. 2008. "The Political Functions of Expert Knowledge: Knowledge and Legitimation in European Union Immigration Policy." *Journal of European Public Policy* 15 (4): 471–488. <https://doi.org/10.1080/13501760801996634>.
- Broekema, Wout, Carola van Eijk, and René Torenvlied. 2018. "The Role of External Experts in Crisis Situations: A Research Synthesis of 114 Post-Crisis Evaluation Reports in the Netherlands." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 31: 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.03.021>.
- Camerlo, Marcelo, and Aníbal Pérez-Liñán. 2015. "Minister Turnover, Critical Events, and the Electoral Calendar in Presidential Democracies." *The Journal of Politics* 77 (3): 608–619. <https://doi.org/10.1086/681028>.
- Carlin, Ryan E., Jonathan Hartlyn, Timothy Hellwig, Gregory Love, Cecilia Martínez-Gallardo, and Matthew Singer. 2023. "The Executive Approval Database: Conceptual and Empirical Bases." In *Economics and Politics Revisited: Executive Approval and the New Calculus of Support*, edited by Timothy Hellwig and Matthew Singer. Oxford: Oxford University Press.
- Centeno, Miguel Ángel, and Patricio Silva. 1998. *The Politics of Expertise in Latin America*. New York: St. Martin's Press.

- Christensen, Johan, and Stine Hesstvedt. 2019. "Expertisation or Greater Representation? Evidence from Norwegian Advisory Commissions." *European Politics and Society* 20 (1): 83–100. <https://doi.org/10.1080/23745118.2018.1515861>.
- Christensen, Johan, and Cathrine Holst. 2017. "Advisory Commissions, Academic Expertise and Democratic Legitimacy: The Case of Norway." *Science and Public Policy* 44 (6): 821–833. <https://doi.org/10.1093/scipol/scx016>.
- Christensen, Johan, Cathrine Holst, and Anders Molander. 2022. *Expertise, Policy-Making and Democracy*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003106555>.
- Cisternas, Carla. 2026. "Strategic Use of Ad Hoc Commissions for Blame Avoidance: Evidence from Chile." *Public Administration Review*: 1–13. <https://doi.org/10.1111/puar.70082>.
- Cisternas, Carla, and Javiera Vásquez. 2018. "Comisiones asesoras presidenciales en Chile: Entre la expertise y la pluralidad de actores sociales." *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 106: 1–22. <https://doi.org/10.32992/erlacs.10349>.
- Craft, Jonathan, and Michael Howlett. 2013. "The Dual Dynamics of Policy Advisory Systems: The Impact of Externalization and Politicization on Policy Advice." *Policy and Society* 32 (3): 187–197.
- Cox, Gary W., and Scott Morgenstern. 2001. "Latin America's Reactive Assemblies and Proactive Presidents." *Comparative Politics* 33 (2): 171–189. <https://doi.org/10.2307/422377>.
- Cruz, Cesi, Carlos Scartascini, and Philip Keefer. 2021. *The Database of Political Institutions 2020*. Washington, DC: Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.60966/GN3S-AT31>.
- Dargent, Eduardo. 2015. *Technocracy and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Epstein, David, and Sharyn O'Halloran. 1999. *Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldstein, Joshua S. 1992. "A Conflict-Cooperation Scale for WEIS Events Data." *Journal of Conflict Resolution* 36 (2): 369–385. <https://doi.org/10.1177/0022002792036002007>.
- González-Bustamante, Bastián. 2020. "The Politics-Administration Dichotomy: A Case Study of the Chilean Executive during the Democratic Post-Transition." *Bulletin of Latin American Research* 39: 582–597. <https://doi.org/10.1111/blar.13044>.

- González-Bustamante, Bastián. 2025. "Blame Shifting in Presidential Systems: Ministerial Terminations' Corrective Effect on Approval." *Public Opinion Quarterly*. <https://doi.org/10.1093/poq/nfaf061>.
- Grindle, Merilee S. 2012. *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Haas, Peter M. 1992. "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination." *International Organization* 46 (1): 1–35.
- Hesstvedt, Stine, and Johan Christensen. 2021. "Political and Administrative Control of Expert Groups—A Mixed-Methods Study." *Governance*. <https://doi.org/10.1111/gove.12599>.
- Hesstvedt, Stine, and Peter Munk Christiansen. 2021. "The Politics of Policy Inquiry Commissions: Denmark and Norway, 1971–2017." *West European Politics* 45 (2): 430–454. <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1858597>.
- Hood, Christopher. 2011. *The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government*. Princeton: Princeton University Press.
- Hunter, Alistair, and Christina Boswell. 2015. "Comparing the Political Functions of Independent Commissions: The Case of UK Migrant Integration Policy." *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 17 (1): 10–25. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.896117>.
- Joignant, Alfredo. 2011. "The Politics of Technopols: Resources, Political Competence and Collective Leadership in Chile, 1990–2010." *Journal of Latin American Studies* 43 (3): 517–546.
- Inwood, Gregory J. 2005. *Continentalizing Canada: The Politics and Legacy of the MacDonald Royal Commission*. Toronto: University of Toronto Press.
- Kopecký, Petr, Peter Mair, y Maria Spirova, eds. 2012. *Party Patronage and Party Government in European Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Kopecký, Petr, Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Francisco Panizza, Guillermo Scherlis, Christian Schuster, y Maria Spirova. 2016. "Party Patronage in Contemporary Democracies: Results from an Expert Survey in 22 Countries from Five Regions." *European Journal of Political Research* 55 (2): 416–431.
- Lentsch, Justus, and Peter Weingart. 2011. *The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511777141>.

- Manza, Jeff, Fay Lomax Cook, and Benjamin I. Page, eds. 2002. *Navigating Public Opinion: Polls, Policy, and the Future of American Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Marier, Patrik. 2009. "The Power of Institutionalized Learning: The Uses and Practices of Commissions to Generate Policy Change." *Journal of European Public Policy* 16 (8): 1204–1223. <https://doi.org/10.1080/13501760903332761>.
- Martínez-Gallardo, Cecilia. 2014. "Designing Cabinets: Presidential Politics and Ministerial Instability." *Journal of Politics in Latin America* 6 (2): 3–38. <https://doi.org/10.1177/1866802X1400600201>.
- Müller, Wolfgang C. 2006. "Party Patronage and Party Colonization of the State." En *Handbook of Party Politics*, 189–195. London: SAGE.
- Orozco, Gabriel. 2016. "Comunidades epistémicas en los estudios de seguridad y la interpretación del orden mundial." *Desafíos* 28 (1): 335–369.
- Owens, Susan. 2015. *Knowledge, Policy, and Expertise: The UK Royal Commission on Environmental Pollution, 1970–2011*. Oxford: Oxford University Press.
- Panizza, Francisco, B. Guy Peters, y Conrado Ramos. 2018a. "Roles, Trust and Skills: A Typology of Patronage Appointments." *Public Administration* 97 (1): 147–161.
- Panizza, Francisco, Conrado Ramos, y Guillermo Scherlis. 2018b. "Unpacking Patronage: The Politics of Patronage Appointments in Argentina and Uruguay's Central Public Administrations." *Journal of Politics in Latin America* 10 (3): 59–98.
- Panizza, Francisco, B. Guy Peters, y Conrado Ramos, eds. 2022. *The Politics of Patronage Appointments in Latin American Central Administrations*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Peters, B. Guy. 2013. "Politicisation: What Is It and Why Should We Care?" En *Civil Servants and Politics*, 12–24. London: Palgrave Macmillan.
- Radaelli, Claudio M. 1999. "The Public Policy of the European Union: Whither Politics of Expertise?" *Journal of European Public Policy* 6 (5): 757–774. <https://doi.org/10.1080/135017699343360>.
- Salter, L. 1988. "Mandated Science." In *Mandated Science: Science and Scientists in the Making of Standards*, edited by L. Salter, 186–209. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Saz-Carranza, Ángel, Pamela Maturana, and Xavier Quer. 2020. *The Empirical Use of GDELT Big Data in Academic Research*. GLOBE Project, European Union.

- Schrefler, Lorna. 2010. "The Usage of Scientific Knowledge by Independent Regulatory Agencies." *Governance* 23 (2): 309–330. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2010.01481.x>.
- Silva, Patricio. 2009. *In the Name of Reason: Technocrats and Politics in Chile*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Silva, Patricio. 2023. "The Chilean Neoliberal State: Origins, Evolution, and Contestation, 1973–2020." In *State and Nation Making in Latin America and Spain: The Neoliberal State and Beyond*, edited by Miguel Ángel Centeno and Agustín E. Ferraro. Cambridge: Cambridge University Press.
- Somma, Nicolás M., Matías Bargsted, Rodolfo Disi Pavlic, and Rodrigo Medel. 2021. "No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019–2020." *Social Movement Studies* 20 (4): 495–502. <https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1727737>.
- Stone, Diane. 1996. *Capturing the Political Imagination: Think Tanks and the Policy Process*. London: Frank Cass.
- Sulitzeanu-Kenan, Raanan. 2010. "Reflection in the Shadow of Blame: When Do Politicians Appoint Commissions of Inquiry?" *British Journal of Political Science* 40 (3): 613–634. <https://doi.org/10.1017/S0007123410000049>.
- Sulitzeanu-Kenan, Raanan. 2020. "Blame Avoidance and Crisis Inquiries." *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1591>.
- Weaver, R. Kent. 1986. "The Politics of Blame Avoidance." *Journal of Public Policy* 6 (4): 371–398. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00004219>.
- Weiss, Carol H. 1979. "The Many Meanings of Research Utilization." *Public Administration Review* 39 (5): 426–431. <https://doi.org/10.2307/3109916>.
- Zegart, Amy B. 2004. "Blue Ribbons, Black Boxes: Toward a Better Understanding of Presidential Commissions." *Presidential Studies Quarterly* 34 (2): 366–393. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2004.00049.x>.